

Prólogo de Ana Pastor

ESTEFANÍA MOLINA
EL BERRINCHE
POLÍTICO

2015-2020



Los años que
sacudieron
la democracia
española

DESTINO

Estefanía Molina

El berrinche político

2015-2020

Los años que sacudieron la democracia
española

Prólogo de Ana Pastor

© Estefanía Molina, 2021

© Editorial Planeta, S. A. (2021)
Ediciones Destino es un sello de Editorial Planeta, S. A.
Diagonal, 662-664. 08034 Barcelona
www.edestino.es
www.planetadelibros.com

© del prólogo: Ana Pastor, 2021

Primera edición: mayo de 2021

ISBN: 978-84-233-5957-8
Depósito legal: B. 5.134-2021
Preimpresión: Realización Planeta
Impreso por Huertas Industrias Gráficas, S. A.
Impreso en España - *Printed in Spain*

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como **papel ecológico** y procede de bosques gestionados de manera **sostenible**.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ÍNDICE

Prólogo	11
Introducción. El berrinche político	17
1. De los tecnócratas al Gobierno bonito: qué es ser un buen político.	23
Los enarcas (y también los <i>aristoi</i>)	27
«La gente» (y los folclóricos)	35
Los profesionales	44
Los <i>celebrity</i>	52
2. El bipartidismo se convirtió en bibloquismo	59
Adaptarse al lío.	64
Las paradojas del multipartidismo	68
La gran coalición o la noción bipartita de la política	75
El hundimiento del gran centro o la tragedia de la regeneración	82
La trilera geometría variable.	85
Nueva cultura parlamentaria	90
3. Un Congreso convertido en plató televisivo	95
El vaciado de la función político-legislativa.	99
Más ojos mediáticos que nunca.	104
Un teatro en el Parlamento	109
Anomalías del control y la cohabitación	114
La ley de leyes: los presupuestos y el decretazo-ley ..	119
Soberanía con rostro humano	123

4.	La política relato-dirigida: la obsesión por el máquetin y la sondeocracia	129
	Pinchar la burbuja marquetiniana	134
	Solidificar los climas de opinión	140
	Especies en la jungla mediática	144
	Los <i>spin doctors</i> al ataque.	148
	Huir de los periodistas	150
	La opinión ocultada y el populismo	155
5.	El cesarismo se impone en los partidos políticos	161
	Diferencias con el personalismo	165
	La militancia	169
	Contrapesos (barones, sectores críticos, reglamentos)	176
	Fenómenos de competición, antiélites y supervivencia	182
	La herida de las primarias: integración o expulsión. .	187
6.	Otro presidencialismo aterriza en la Moncloa	191
	Aislar al partido	196
	Sobrevolar el Parlamento	201
	El efecto <i>underdog</i> o el líder solitario	204
	Espejismo autoritario	207
	El Poder Judicial	212
7.	PSOE y Podemos: el monopolio de la izquierda institu- cional contra el 15-M.	217
	El Estado contra el anti-Estado	223
	Solo una izquierda de Estado	226
	Sánchez y el darwinismo político	229
	Iglesias, de inquisidor a líder amordazado.	234
	La utopía republicana	239
8.	La herida nacional sangra al PP en Ciudadanos y Vox	243
	Pluralismo frente a antipluralismo político	246
	Centralismo y <i>chantaje</i> del nacionalismo	251
	Nacionalismo español y estado unitario	258
	El PP frente a sus fantasmas	261
	Cosmovisiones rurales de las derechas	264
	El discurso sin mérito	268

9. El <i>Govern de Vichy</i> y los jóvenes del independentismo.	275
La brecha entre la calle y las élites.	279
Generación procesista o pulsión pasajera	282
Puigdemont, populismo y peronismo	287
ERC, la nueva Convergència	292
La venganza del 1-O	296
Estereotipar la realidad ignorada	300
10. La lucha regionalista aterriza en las Cortes: el fenómeno del neocantonalismo	303
Madridcentrismo como cosmovisión.	309
Plurinacionalidad podémica	313
El vaciado de Ciudadanos	320
La egolatría del <i>procés</i> y el 155	321
Financiación irredenta.	326
11. Polarización política, pulsiones populistas, antisistema: las dos Españas, de nuevo	331
Amigo-enemigo: la polarización política	336
Jarabe contra la espiral revanchista.	344
Discursos adanistas y revolucionarios	348
Reforma improbable de la Constitución	351
Titulares como puños	354
Agradecimientos.	357
Bibliografía	361

DE LOS TECNÓCRATAS AL GOBIERNO BONITO: QUÉ ES SER UN BUEN POLÍTICO

Oiga, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada? Ustedes hablan mucho de la gente, pero [...] nadie tiene el patrimonio de la gente, [...] aunque nosotros tenemos un poquito más, por lo menos en estas últimas elecciones.

Mariano Rajoy a Pablo Iglesias
en la sesión de investidura en el Congreso en 2016

Marzo de 2019. Un exdirigente de Podemos me había citado en el barrio de Conde de Casal de Madrid para tomar un café. Habíamos quedado para hablar sobre varios asuntos: el regreso de Pablo Iglesias a la política tras su baja paternal, la situación del partido, la nueva candidatura que, según se rumoreaba, Íñigo Errejón estaba a punto de lanzar a escala nacional —que luego se llamó Más País— y la política española en general. Al despedirnos, ya en un tono más distendido, mi interlocutor me deslizó una anécdota. «Resulta que estaba paseando por un barrio. De pronto, una señora se me acercó a saludar muy amable, me dijo que era votante del partido. Me plantó dos besos. Luego, se me aproxima más para que no nos

oigan, y me pregunta en voz baja: “¿A que no es cierto que Iglesias se ha comprado un chalé?, ¿a que no es verdad? ¿A que eso es un invento de los medios?”. Yo digo que eso no es cierto, porque algunos medios siempre están inventando cosas sobre Podemos y seguro que esto también es mentira...», me explicó. Pero no era ningún invento. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la entonces portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, Irene Montero, se habían comprado un chalé en la sierra de Galapagar. Atrás quedaba aquella idea de que los líderes de Podemos sí vivían como «la gente».

Sin embargo, la anécdota tal vez ilustre el deseo latente de una parte de la ciudadanía de que la política sea distinta, gratificante, un arte noble, o de que, al menos, esos valores que le atribuyen sean encarnados por los políticos. Tal vez esto ocurra por la necesidad de justificar el poder y los privilegios (coches oficiales, sueldos...) de la clase dirigente o por un afán romántico de que haya, en la dirección de la sociedad, referentes que materialicen sus anhelos. Esa pulsión de esperanza puede aparecer unas veces como un destello; otras, en cambio, irrumpe a lomos de un colosal derrumbe sistémico, como ocurrió en 2011 durante el 15-M, cuando, entre los ecos del «No nos representan» de los indignados, se abogó por una nueva forma de entender la relación entre representados y representantes. Por ello, cuando Ciudadanos y Podemos irrumpieron en el tablero estatal —en las elecciones generales de 2015—, a muchos votantes se les iluminó el voto creyendo que su entrada en las instituciones pondría fin a los vicios de la clase dirigente, encarnada hasta entonces por el Partido Popular y el PSOE.

Ahora bien, el balance de estos cinco años arroja una conclusión preocupante: el malestar respecto a la clase política española, pese a los esfuerzos por introducir nuevos per-

files más satisfactorios, se ha cronificado, y la política sigue siendo, según reflejan los ciudadanos en las encuestas, una de las profesiones peor valoradas y uno de los principales problemas del país. Tanto es así que el *berrinche político* pasa, en este caso, por observar cómo el sentimiento de desilusión y la sensación de confianza frustrada que recaen sobre la clase política, expresados con menor o mayor intensidad, han regresado. «Todos son iguales» o «No los soporto» son lamentos que se podrían oír en cualquier bar a las nueve de la mañana, pero además, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en diciembre de 2019 identificaban al 49,5 % de los encuestados¹ en su informe, mientras que en enero de 2016 esa cifra suponía el 23,4 %.

Además, estos síntomas reaparecen cada vez con mayor frecuencia, tal vez porque los intervalos entre las crisis también se han acortado. Se apreció en 2020 con la pandemia del coronavirus, y había ocurrido anteriormente en 2011 y 2015, tras la crisis económica de 2008, que hizo detonar un cóctel donde se mezclaba una elevada desafección por la corrupción con la sensación de alejamiento de las instituciones respecto de la calle. El contexto socioeconómico, de creciente precarización social, tampoco llama al optimismo porque la incapacidad sostenida que ha demostrado la clase dirigente para mejorar ciertas condiciones de vida de los ciudadanos hace pensar que la pulsión del malestar no desaparecerá fácilmente, lo que supone un fracaso de la idea de que la política puede transformar la vida de la ciudadanía.

1. El indicador que utilizó el CIS hasta diciembre de 2019 como principales problemas fue «Los políticos en general, los partidos políticos y la política». Esta categoría se dividió en enero de 2020 en tres: «Los problemas políticos en general»; «El mal comportamiento de los/as políticos/as»; «Lo que hacen los políticos». Fuente: CIS.

Pese a ello, la clase política seguirá existiendo, porque la historia ha demostrado que únicamente un sistema de democracia asamblearia o directa, al estilo de las plazas del 15-M, tampoco garantiza resultados más eficaces, asumiendo que cuanto más grande es un país, más dificultades encuentran estos mecanismos para articular demandas. En cualquier sistema, además, la forma de tomar decisiones hará que existan unos ganadores y unos perjudicados. Una vez aceptada esa necesidad de representantes, la clave del periodo 2015-2020 se halla en que ha pasado precisamente por un proceso de revisión constante de los distintos partidos, que ha girado en torno a una misma idea: ¿qué es ser un buen político?

Ante todo, es necesario destacar que la respuesta depende de la relación que cada votante establece con la política. Hay ciudadanos que protestan para que sus peticiones se reflejen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que otros solo esperan que los políticos los dejen en paz para hacer su vida. En cualquier caso, para responder a esa pregunta —¿qué es ser un buen político?—, algunos ciudadanos se decantarían por el elemento personal, es decir, por las habilidades humanas o el currículum profesional, y resaltarían en los dirigentes virtudes morales del carácter (empatía...) o preferirían perfiles que simplemente demuestren competencia laboral. Otro segmento de los votantes privilegiaría la manera en que los Gobiernos canalizan las demandas ciudadanas, es decir, que el político *conecte con la calle*. Por último, cabría señalar la satisfacción con los resultados: la economía, los derechos sociales..., aunque en este elemento no solo interviene la voluntad del político, sino también el contexto.

Estos debates sobre la esencia de la política, que se abrieron en la sociedad española hace cinco años, se han

ido cimentando a través de los distintos desafíos y fases que ha vivido nuestro país, como el proceso soberanista catalán, el hastío ciudadano a causa de la corrupción, la creciente emocionalidad de la política... Fruto de esa conjunción, se han ido dibujando distintos perfiles de político, que también sirven para explicar una parte de la historia y de la evolución de este tiempo. Estos perfiles son, en mi opinión, los siguientes: los enarcas, «la gente», los profesionales y los *celebrities*. Es clave conocer el motivo de su aparición y también las debilidades de cada uno para saber a qué atenernos y reducir así las posibilidades de decepción colectiva.

LOS ENARCAS (Y TAMBIÉN LOS *ARISTOI*)

Cuando Vox propuso en 2020 un Ejecutivo de tecnócratas que sustituyera a la coalición de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos para gestionar la reconstrucción pos-COVID-19, la propuesta no pareció chirriar demasiado entre algunos sectores de la ciudadanía. Esto es así porque en cada crisis o emergencia, como una quiebra económica o una pandemia, aparece en España la pulsión ciudadana, provocada por el desasosiego, de que los políticos elegidos en las urnas se aparten y unos técnicos cualificados tomen las riendas. Un ejemplo próximo es Italia, donde en febrero de 2021 el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue llamado por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, a formar un gobierno técnico ante la emergencia sanitaria y social del país alpino.

El término *enarquía* tiene su origen en el acrónimo de la École Nationale d'Administration, la ENA, es decir, la institución académica francesa orientada a la formación

de funcionarios públicos de alto nivel, que actúa como cantera de sus élites políticas. Como tipo ideal, el modelo enárquico —el de los tecnócratas— tiene un cierto trasfondo elitista, porque, a fin de cuentas, parte de la idea de que existe una *masa*, compuesta por la mayoría de los ciudadanos, que es gobernada por una *élite*, la clase dirigente, que sabe lo que hay que hacer incluso ante circunstancias adversas. Este modelo es lo más parecido a la democracia representativa tal como la entendía Joseph Schumpeter, pues pone el foco en el *procedimiento* por el cual el votante elige entre una pluralidad de opciones (los partidos políticos) que compiten entre sí por el poder. Realizado ese trámite (el voto), los ciudadanos dan por cumplido su papel y deben aguardar hasta la siguiente elección, dejando en manos de los escogidos todas las decisiones. En casos de emergencia, el modelo enárquico va incluso más allá de la propia democracia representativa, porque asume la idea de que hay unos *expertos o técnicos* que poseen las recetas que hay que aplicar —la idea de la «austeridad» que fue tan común a partir de 2008—, cuyas fórmulas emanan de la academia o la ciencia de forma prácticamente indiscutible, por lo que sus soluciones, pese a que haya ciudadanos que discrepen ideológicamente, deben aplicarse por encima incluso de los cambios en los Gobiernos.

De hecho, las pulsiones enárquicas están muy arraigadas en nuestro sistema, ya que en el pasado la tecnocracia evocaba la etapa del Desarrollismo franquista de los años sesenta. Ya en pleno periodo democrático, su valoración se produce a causa de la eficiencia de resultados que muchos votantes atribuyen a esta forma técnica de entender la política. Por ejemplo, ese es el motivo de que el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la grave crisis económica de 2008 —con el país al borde de la quiebra

o el rescate europeo—, fuera aupado hasta la mayoría absoluta —186 escaños— en las elecciones de 2011. Al menos once de los catorce ministros que formaban su gabinete estaban vinculados a esa vertiente tecnocrática —como Soraya Sáenz de Santamaría, Álvaro Nadal o Cristóbal Montoro—. Aquel Ejecutivo, en uno de los periodos más crudos de la historia para muchos ciudadanos, marcó una forma de hacer política basada en la búsqueda de la eficiencia de resultados. Sin embargo, ello se llevó a cabo, demasiado a menudo, a costa de sacrificar otras variables como la popularidad mediática, partiendo de la creencia en un ciudadano pasivo o un votante sin apenas necesidades emocionales como la identificación o la empatía.

Pero este modelo pronto colisiona con ese tipo de ciudadanía que demanda otra forma de hacer política. De hecho, la paradoja de este tiempo fue que el Ejecutivo de Rajoy ganara las elecciones de 2015, a pesar de las medidas impopulares con las que afrontó la durísima crisis económica, pero naufragara por su incapacidad para impedir la exacerbación del proceso soberanista en Cataluña. Quizás porque para el primer problema político había una medicina que aplicar, una doctrina económica a instancias de la UE, pero la complejidad social y política del segundo, como el tiempo demostró, exigía algo más que la ley o los tribunales para disuadir a los ciudadanos que apoyaban la secesión.

De ese modo, si el conflicto territorial estuvo todo el tiempo condenado al choque, en parte fue porque se enfrentaron dos concepciones de entender la democracia del todo irreconciliables. Por un lado, la visión basada en la Constitución y la aplicación estricta de las leyes —y con algo menos de creatividad en el terreno político. El modelo de emanación del poder de arriba abajo—. Por

otro, la tensión oclocrática simbolizada por el independentismo. La oclocracia —en terminología de Polibio— es una forma de degeneración de la democracia en la que una masa de gente se autoproclama representante de la voluntad ciudadana. Esta masa de ciudadanos busca influir de forma decisiva en la toma de decisiones políticas de sus representantes —como ocurrió con el Govern de la Generalitat— a través de la presión de las manifestaciones y de acciones colectivas —en este caso, empujando a sus dirigentes a saltarse hasta el propio ordenamiento legal—. El modelo de abajo arriba.

El entonces presidente Mariano Rajoy fue especialmente crítico con ello en una entrevista concedida a Telecinco en 2017 después de que el Parlament de Cataluña votara la declaración unilateral de independencia: «Un gobernante tiene que oír a la gente, un gobernante tiene que oír lo que le dice la calle, pero un gobernante tiene que tener personalidad para tomar decisiones y para actuar de conformidad con el interés general, y no se puede asustar porque haya dos mil, tres mil o cinco mil manifestantes llamándole “traidor”. Eso no lo hace un buen gobernante», manifestó en alusión al *expresident* de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ahora bien, por otra parte, al Ejecutivo del PP se le achacó que le había faltado *política* o astucia en su manera de encarar el conflicto soberanista, algo que no solo tuvo que ver con el hecho de que no se pudiera autorizar en España un referéndum como el que promovía el Govern o con que el *procés* se echara en brazos de la vía unilateral a lo largo de 2017. También influyeron las debilidades del modelo enárquico, cuya concepción demasiado práctica y rígida lo imposibilitan para utilizar otras vías de hacer política, como llevarse al adversario político al propio terreno o servirse del carisma para vencerlo.

Como dijo Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, en su comparecencia en la Comisión de Evaluación Territorial el 10 de enero de 2018: «Los mejores constitucionalistas españoles han sido los administrativistas. [...] Sin embargo, todo tiene su precio y los administrativistas no concibieron —a lo mejor es un defecto que siguen teniendo muchos estudiosos del derecho administrativo— que pueda haber una realidad fuera del Aranzadi [Aranzadi es el nombre de una conocida editorial cuyos libros usan los juristas u opositores del Estado] y de los esquemas de los manuales de derecho administrativo y, claro, eso también tuvo malas consecuencias. Lo que se había ideado fundamentalmente para Cataluña se generalizó a diecisiete comunidades». Pese a que Herrero de Miñón se refería entonces a la construcción del Estado autonómico y al desarrollo del Título VIII de la Constitución, de sus palabras extrapolé la falta de visión de ciertos gobernantes o juristas a la hora de integrar los conflictos políticos complejos o que desbordan la abstracción de los manuales. La política no solo consiste en tener determinados conocimientos —de hecho, los ciudadanos, con cierto desdén, también suelen decir que un político es un *tecnócrata* si creen que no es capaz de llegar a conectar con los problemas de base—, sino también en buscar soluciones o adelantarse a los acontecimientos. Y para ello, a veces, conviene una cierta flexibilidad, pues la ley es también un instrumento, no solo un fin en sí mismo. Recordaba al respecto una anécdota que se dio en los pasillos del Congreso después de que el Ejecutivo del PP acabara de enviar el requerimiento al Govern, paso previo a la aplicación del artículo 155. Los periodistas nos agolpamos en torno a uno de los miembros del Gobierno, aunque por momentos me pareció que la explicación se asimilaba más a una clase

magistral sobre los recovecos de la legislación, sobre la falta de jurisprudencia..., cuando en realidad estábamos hablando de una cuestión fáctica, sobre si una parte del territorio se había independizado de España.

En este sentido, es interesante observar hasta qué punto las fricciones que generó el Gobierno del PP durante su primera legislatura tuvieron que ver con el desborde de los márgenes de la democracia representativa, propiciado por los ciudadanos que reivindicaban una vertiente más participativa de la democracia. Esto no solo se vio reflejado en las manifestaciones del independentismo catalán —el llamado «derecho a decidir», la consulta ilegal del 9-N o el referéndum ilegal del 1-O—, sino también en las movilizaciones en contra de la gestión de la crisis por parte de las llamadas marea blanca, de la sanidad, o marea verde, de los profesores.

Con todo, en nuestro país es muy común la presencia de abogados del Estado, jueces, fiscales, técnicos de la administración civil, diplomáticos y demás en los consejos de ministros y los puestos de dirección política de la administración, tanto del Partido Popular como del PSOE, por sus elevados conocimientos y su alta capacitación para esos puestos —diplomacia, economía, derecho...—. Si bien es cierto que esos perfiles acaban configurando grupos o élites conectados entre sí, un aspecto positivo del modelo enárquico es que este tipo de políticos tienen convicciones profundas a la hora de tomar decisiones y actúan con cierta libertad, lo cual los emancipa, en el corto plazo, de la necesidad extrema de agrandar a la opinión pública. Esto es especialmente útil cuando asumen las riendas de un país en crisis, dado que las medidas a aplicar no son fáciles, y un gobernante no puede ceder ante todo lo que deseen los ciudadanos, sino que debe mostrar cierta responsabilidad y convicción. Su mirada

siempre es a largo plazo. Esa libertad para aplicar sus medidas nace en parte del hecho de que tienen una plaza fija de funcionario donde regresar y no viven, por tanto, de la política como oficio. Un ejemplo de promociones conocidas en España sería la llamada «La Gloriosa», la promoción de abogados del Estado que sacaron la plaza en 1996.

Sin embargo, existe el riesgo de saltar del terreno de los expertos políticos al de otros *expertos*, a los que nadie ha votado y que, por ello, no comparecen en el Congreso. Ese debate se apreció en todo su esplendor durante la pandemia del coronavirus. En más de una ocasión, la clase política se escudó en «la ciencia» para tomar determinadas decisiones. Con unos mismos datos, algunos líderes proponían medidas dispares. La desconfianza de los ciudadanos nació, en ese caso, de la creencia de que, tal vez, en el fondo, tras esa apelación a «los expertos» se escondiera el intento de legitimar decisiones políticas amparándose en ese aparente llamamiento al cientifismo. En esencia, existe un riesgo en desproveer a la opinión pública de su función fiscalizadora, como si el hecho de que algo haya sido avalado por «un experto» erradicara el derecho a disentir de esa propuesta, cuando la realidad es que quienes tienen que dar la cara y responsabilizarse de las medidas adoptadas siempre son los políticos, aunque lo hagan asesorados por esos expertos. De lo contrario, sería como decirle al ciudadano que no cuestione porque no entiende, pese a que la democracia parte de la igualdad de voto porque cada cual sabe qué le conviene en su vida.

Hay que recordar que la democracia se basa en que los ciudadanos eligen las opciones o partidos que casan mejor con su forma de entender el mundo o con sus prioridades vitales. Se supone que nuestros representantes

actúan a partir de un esquema de valores —de justicia social, libertad...— votados en las urnas. Y aunque se asume que el político se rodeará de técnicos, existe la convicción de que toda su acción política se articulará a través de un paradigma ideológico. Un dilema similar resulta aplicable a los llamados Gobiernos de «concentración nacional», formados por varios partidos, que se invocan en momentos de excepcionalidad, donde el repliegue puede aparcar las ideologías.

En caso contrario, puede suceder que la enarquilla, en su persecución de la ortodoxia, acabe por vaciarse de ilusión política. En contraposición, dentro de la concepción elitista de la democracia, existe un subtipo de perfil político que podríamos llamar *aristoi*, es decir, «los mejores» —originalmente en referencia a los nobles de la Antigua Grecia—. El enarca sería el gestor, pero el *aristoi* sería un ideólogo o intelectual que busca el debate ideológico o moral. A ambos los une el riesgo de creer que están en política porque se han ganado el cargo gracias a su talento, aunque las listas, de hecho, son elaboradas por el jefe del partido o por el secretario, es decir, que exista un mérito en su ámbito profesional o intelectual no quiere decir que estén en la política por ello, sino porque los ciudadanos han votado a su partido.

Por ello, hay que entender que la política no consiste solo en los títulos ni es un instrumento a mayor gloria de nadie. Es preparación, pero también es empatía y capacidad de identificación con el ciudadano. Demasiada intelectualidad puede alejar o causar sensación de pedantería porque sus soluciones no se dirigen a los problemas de los votantes. Asimismo, lo que se entiende por *ideas* parece a menudo reducirse a una reflexión filosófica sobre lo divino y lo humano, siendo un debate poco orientado hacia el pragmatismo. Cabe recordar que las ideas nacen

también en el ejercicio de la gestión desde un cargo público, como se puso de manifiesto, por ejemplo, cuando el esfuerzo de miles de alcaldes tras la crisis económica evitó que les cortaran la luz a sus conciudadanos en paro, que no podían pagar las facturas.

Como conclusión el criterio tecnocrático es eficaz en términos generales para la gestión diaria de los asuntos públicos. El ministro, para hacer bien su función, necesita de los funcionarios o técnicos, porque estos acumulan un importante capital de experiencia con el paso de los años y son quienes mejor conocen el desarrollo legislativo de cada tema concreto. Aun así, la política es algo más que gestión. Por ello, no es suficiente con ser un político gestor pero sin ambición para cambiar las cosas, aunque tampoco se puede ser únicamente un político carismático al que se le dé bien alzar la pancarta o repetir unas consignas. La administración política del Estado también tiene que ver con el Aranzadi, no solo con la arenga del mitin político o las redes sociales. Eso nos lleva al siguiente perfil político.

«LA GENTE» (Y LOS FOLCLÓRICOS)

Que Podemos se abriera paso inmediatamente después del periodo de máxima expansión de la enarquéa tuvo toda su lógica, como reacción a un modelo de entender la política que era su absoluto antagonista. Con su eclosión se dibujó un nuevo paradigma de corte populista que entiende la realidad mediante la dialéctica entre el pueblo y las élites, pero poniendo el foco en los primeros, en «la gente». Podemos aparece, de hecho, cuando el votante está muy hartado de los vicios de la clase política, afirmando que todo es posible con un poco de voluntad

y que no existen tantas limitaciones como se dice en el campo de la ley o la economía, sino que todos los males vienen de que el control lo ejerce una «casta» —los políticos o los tecnócratas—. En una España tomada por el sentimiento de injusticia e impotencia que provocaban las imágenes de familias enteras desahuciadas, ese discurso sonó como una tabla de salvación para muchos ciudadanos, que vieron una oportunidad para ser más partícipes del poder, más entendidos por sus representantes.

De hecho, la formación morada nació, en 2014, en un caldo de cultivo marcado por la sensación de pérdida de soberanía de los Estados nacionales. Por ese motivo, Podemos abanderó desde el principio la negativa a someterse a la disciplina fiscal de Bruselas —acusando a los tecnócratas de seguir unos postulados que hacían pasar por ciencia—, a eventuales recortes de la Troika o a las injerencias de los llamados «hombres de negro», encargados de velar por las finanzas de la zona euro. Entre otras cosas, el partido fue combativo con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que priorizaba el pago de los intereses de la deuda. Por ese motivo, en 2020 saltaron todas las alarmas para el partido morado con la crisis del coronavirus, ya desde el Gobierno, cuando la UE impuso condiciones a España a cambio de recibir el dinero de los fondos de reconstrucción.

De hecho, el debate acerca de la soberanía nacional ha tenido tantas implicaciones en estos años que no ha dejado de estar latente, avivando las pulsiones euroescépticas, por la sensación de que determinados compromisos supranacionales limitaban la soberanía de los Estados. Vox, la formación de Santiago Abascal, ha sido crítica, cuando no reticente o contraria, con la pertenencia al espacio Schengen para la movilidad de los ciudadanos a causa de ciertos problemas con los permisos de

extradición en la UE —por ejemplo, cuando la justicia de Bélgica o la de Alemania no entregaron a algunos *exconsellers* o a Carles Puigdemont, respectivamente, a España en 2018.

Sin embargo, en la España poscrisis de 2011, Podemos, al albur de los postulados del 15-M, ha sabido explotar como ningún otro partido el hastío generalizado respecto a la clase política y la sensación de alejamiento o de ruptura del nexo entre representados y representantes. Ese modelo populista hace pivotar la representación alrededor del papel de «la gente»: «Ser como la gente para gobernar para la gente». Pero ¿quién es «la gente»? ¿Acaso a los demás partidos no los vota *gente*? «A usted le votan estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes... y suman cinco millones, y es una cifra importante. ¿Y a nosotros, quiénes nos votan, con ocho millones? ¿Los ricos y la gente despistada? [...] Nadie tiene el patrimonio de la gente», espetó Rajoy a Pablo Iglesias en el hemiciclo.

La realidad es que no existe un solo partido en nuestro país que, una vez en el Congreso, pueda apropiarse de una supuesta voluntad popular en exclusiva o erigirse como la encarnación de las preferencias de todo el electorado. Primero, por la evidente prueba numérica de los votos que obtiene cada formación política en las urnas —en este caso, PP y PSOE contaron con más apoyos que Podemos en 2015, 2016 y 2019—. Eso no quiere decir que los partidos políticos no persigan un bien común, sino que no pueden arrogarse ser el todo siendo solo una parte. En una democracia los partidos ganan o pierden elecciones para poder aplicar su programa, que es algo concreto y define sus objetivos y sus preferencias por unos grupos sociales. Por tanto, su representatividad bebe, en primer lugar, de quienes los han votado, pero, a

la vez, de su extensión al conjunto de la ciudadanía al entrar en las instituciones, aunque de forma compartida con el resto de los diputados.

Esa forma de concebir la democracia, de atribuirse la representación de los que sufren, de «la gente», tiene mucho que ver con el origen activista de la formación morada. Es decir, como movimiento político bebió en parte de la descapitalización de plataformas, como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de donde provenía la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, orientada a protestar por los desahucios. De hecho, es llamativo cómo la intensidad de las manifestaciones de algunos movimientos sociales se redujo visiblemente a lo largo de estos años, tras la entrada del partido morado en las instituciones, a causa de la sensación de que se había canalizado el conflicto. De ese modo, la concepción de la democracia que Podemos ha instilado en la política española bebe de una fuerte vertiente *republicana* —o propia de la Antigua Grecia, donde el llamado «idiota» era aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, solo de los privados—. Es decir, otorga una función clave a la ocupación del espacio público, a las virtudes participativas del ciudadano, a su voluntad de influir en los procesos, las decisiones y hasta en los resultados —lo opuesto a los enarcas, que, una vez elegidos por los votantes, prefieren asumir el control de la gestión—. Por eso mismo, el perfil tecnocrático se lleva mal con la idea de los referéndums, dado que estos son el culmen de la democracia directa, de que se exprese el ciudadano en una foto fija en el tiempo y sin intermediarios ni expertos. Ahora bien, aunque a menudo se atribuye una connotación positiva al hecho de que la ciudadanía participe intensamente en la vida política, porque se cree que eso hará que los ciudadanos se informen y sean más críticos, así como que su

participación resulte de mayor calidad, la realidad es que ese esquema no siempre opera satisfactoriamente, pues suelen ser los ciudadanos ideologizados —más radicales— los que mejor pueden mantener, a largo plazo, el afán intenso de participar, a causa de los costes materiales y de tiempo que genera la participación política. Y esto tiene consecuencias, como que su ideologización extrema probablemente los lleve a consumir informaciones que retroalimenten sus posiciones, con lo que se inicia una rueda a la que más tarde puede ser complicado poner freno. Es la crítica al llamado participacionismo, que recoge el politólogo Giovanni Sartori en su obra *¿Qué es la democracia?* (2014), a partir de las aportaciones de varios autores.

Con todo, la necesidad de mantener un nexo inquebrantable con la calle ha condicionado las diversas fases del desarrollo de Podemos. Desde la oposición, la formación morada siguió mezclándose a menudo con las protestas de colectivos sociales —pensionistas, desahuciados...—. Es decir, decidió mantenerse a medio camino entre la pancarta callejera y el escaño y seguir alineándose con grupos de interés de fuera del Parlamento aun después de haber obtenido representación parlamentaria.

Ello nos lleva a reflexionar sobre las teorías del «mandato imperativo», aquel según el cual el representado o mandante se reserva la facultad de instruir al mandatario, es decir, de fijar el sentido en que los elegidos han de emitir su voto. Ello implicaría que los representantes estuvieran obligados al cumplimiento íntegro del programa con que se presentaron a las elecciones, o que incluso los representados pudieran darles instrucciones. Ahora bien, según la Constitución, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. En España el mandato es representativo y libre. Los re-

presentantes se independizan de sus electores una vez elegidos, porque representan al conjunto de la soberanía nacional, y no solo a aquellas personas que los han escogido, entre otras cosas porque los contextos políticos y económicos son cambiantes y las decisiones a veces se supeditan a ello.

Pero volviendo a la evolución de la formación morada, en un segundo momento, cuando Podemos se estableció como socio del PSOE fuera del Gobierno, a partir de 2018, su posición de equilibrio se hizo más difícil de mantener porque tenía que seguir dando la cara ante los suyos aun cuando no pudiese sacar adelante sus propuestas más maximalistas, con el añadido de que no tenía una capacidad total para influir sobre la política del Gobierno. A fin de cuentas, los partidos que se deben tanto a sus bases pueden empezar a sufrir desgaste en el curso de la política del día a día incluso antes de gobernar en plenitud.

Por último, ya en el Ejecutivo de coalición, uno de los primeros conflictos que tuvo que abordar el binomio PSOE-Podemos fue el estallido del campo español a inicios de 2020 por los precios de las materias primas agrícolas. La polémica se inició cuando el 14 de febrero de ese año el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo se reunió con los sindicatos, desconvocando a la patronal agraria en el último momento, pese a que ese encuentro estaba inicialmente previsto con ambos agentes. Más allá de si fue a propósito o un descuido, el mensaje bien pudo interpretarse de la siguiente forma: este es «el Gobierno de la gente», de las clases castigadas, y por eso planta al empresariado. Ahora bien, los Gobiernos tienen, por supuesto, sus prioridades —políticas más pro empresa o políticas más pro trabajador— pero el Poder Ejecutivo no debería entenderse de parte, ni avivar sentimientos

maniqueos entre grupos como si los trabajadores fueran los buenos y los propietarios los malos. Un partido, en cuanto a representatividad, termina allí donde empieza el Gobierno de la nación, porque cuando pisa la Moncloa gobierna para los cuarenta y siete millones de españoles.

Para hacer frente a las contradicciones, el propio Iglesias se impuso un papel de *político-activista*, como si unos días estuviera dentro del Gobierno y otros fuera de este, conjugando oposición y Gobierno al mismo tiempo, prácticamente. «El próximo Gobierno necesitará de la crítica y la presión de los movimientos sociales para hacer las cosas bien [...]. Vais a ser la referencia de esta Vicepresidencia [de Derechos Sociales y Agenda 2030]», fueron algunas de sus frases al llegar al cargo. La formación morada encontró así la forma de mitigar el desgaste político que suponía que «la gente» se amotinara contra su propio Gobierno.

Desde la oposición, su papel había venido dado: denunciar a la clase política, criticar al Ejecutivo de turno. Pero ya en el Gobierno, si los ciudadanos seguían sin sentirse representados, existía un alto riesgo de decepción de los afines a su formación. Este es el motivo por el que el patrón del perfil de político que he denominado «la gente» desdibuja la asunción de responsabilidades: si el vicepresidente alienta la protesta, si pide que se siga presionando del lado de los manifestantes, es complicado que los ciudadanos sepan entonces a quién pedirle responsabilidades por aquellas cuestiones que no queden resueltas o no les satisfagan tras aplicar determinadas políticas o soluciones.

Ahora bien, la parte más positiva del modelo *conectado* con la calle es su capacidad de permeabilizar con rapidez el caldo de cultivo ciudadano. Es decir, resulta fácil que haya una receptividad más intensa de las de-

mandas sociales. Pese a ello, en momentos excepcionales, la presión de la calle puede generar incentivos perversos para la gestión pública, por cuanto no se apliquen los mejores criterios, sino los más populares o populistas.

En consonancia con su pretensión de ser un modelo para «la gente», otra de las revoluciones de la llegada de Podemos a las instituciones fue la noción de perfeccionismo moral que el nuevo partido quiso establecer como una de las bondades del buen político. «Lo personal es político», dijo Montero en la rueda de prensa que ofreció tras la compra del chalé de Galapagar. Este hecho llegaba después de que el partido hubiera criticado por activa y por pasiva que ciertas formas de vida alejaban de los problemas de la calle. Pese a las críticas que se habían formulado en el pasado desde Podemos, sus dirigentes debían asumir que la institucionalidad a tan alto nivel tiene unas lógicas propias que alejan de la ciudadanía, como los coches oficiales, los escoltas, la presencia mediática, que han venido demostrándose estructurales. Aun así, otros ejemplos de su propio partido demostraron que el grado de alejamiento respecto de las formas de vida de *los de abajo* es también discrecional. Kichi y Teresa Rodríguez, alcalde de Cádiz y portavoz de Adelante Andalucía respectivamente, además de pareja, siguieron viviendo en su *piso de currantes*.

Otra muestra de que Podemos fue dejando atrás el discurso de «la gente» es que en 2020 se aprobó una modificación en su código ético, que consistía en suprimir el Salario Mínimo Interprofesional como marco de referencia para la limitación salarial de sus miembros. Ese tope había causado malestar en algunos sectores de la formación. En adelante, se proponía que las donaciones del salario percibido en el ejercicio de un cargo político se hicieran por porcentajes «en función de las res-

ponsabilidades asumidas». Por otra parte, se abrió la posibilidad de que la limitación del tiempo de mandato en el partido, de ocho años, se prorrogara hasta los doce. La interpretación más extendida era que esto se había hecho por la voluntad de Montero e Iglesias de repetir su cargo en el actual Gobierno de coalición, pese a que una eventual salida de Iglesias del Ejecutivo podría postular a Yolanda Díaz como posible candidata de UP.

Sin embargo, a medida que caía en descrédito el discurso de «la gente», Podemos abrazó otras formas de hacer política, con aires de la cultura pop (popular), abandonando así la imagen de la *lucha de clases*. De esta manera, pasó de *ser como la gente* a un afán menos ambicioso, que pasaba por que la gente se *identificara* con la formación morada desde un punto de vista folclórico. Por ejemplo, durante un tiempo el Iglesias vicepresidente contaba muy a menudo por Twitter las series de televisión que veía. En otra ocasión, se difundieron unas imágenes del Ministerio de Igualdad en las que se veía a los asesores de Montero con una tarta el día de su cumpleaños. Ahora bien, pese a que la España política de la que venía el partido durante la crisis no se prodigaba en esos gestos, la crítica que se ha hecho a esa manera de actuar es la de que se pueda caer en la trampa de creer que los políticos que no se muestran en esa tesitura no tienen empatía. Es más, recordemos que una buena parte de la ciudadanía no se conformará solo con acciones de empatía si no van de la mano de mejoras tangibles de su vida.

A pesar de lo expuesto, hay partidos que han percibido que esas formas de representación pueden entenderse como un reclamo, dando lugar a la consolidación de esa variante que he llamado los folclóricos. Por ejemplo, en

abril de 2019 Vox se presentó a las elecciones haciendo gala de contar entre sus listas con toreros como Serafín Marín o con el banderillero Pablo Ciprés. El Partido Popular, para rivalizar con esa formación, hizo lo propio presentando al torero Miguel Abellán en sus listas. Con anterioridad había sido frecuente en otros partidos la inclusión de activistas sociales y de miembros destacados de la judicatura, la cultura o la actividad económica. Pero ese punto goyesco tenía su intrínquilis porque simbolizaba una forma de conectar con el ciudadano o de mostrarle su comprensión de España.

La última implicación que puede tener el modelo de «la gente» es dar alas al argumento de la desprofesionalización de la actividad política, partiendo de la consideración de que cualquiera puede regentar las instituciones sin necesidad de unos conocimientos previos. Ahora bien, además de la necesidad de entender de los temas concretos que se legislan, la enseñanza extraída por cualquier diputado del Congreso es que la política también requiere de un *savoir faire*, de un *know-how*, como cualquier otra profesión. Con el tiempo, los parlamentarios van consolidando una serie de técnicas para maximizar su función legislativa o de oposición. Las instituciones políticas tienen unas inercias propias, unos procedimientos concretos, que también sirven para acumular capital político a lo largo de los años, antes de llegar al Gobierno.

LOS PROFESIONALES

Existe un tercer tipo de político, en oposición a los enarcas y «la gente», que considera que los ciudadanos quieren, por encima de todo, gobernantes que no se metan demasiado en su moralidad o en su vida. Considera que

estos solo piden reglas legales o económicas que les permitan desarrollar su esfera individual sin intromisión del Estado, ya sea en el ámbito privado o en el socioeconómico. Este modelo entiende la política como una gestión dirigida a la eficiencia de resultados y a la innovación. El objetivo es superar los pies de barro de la administración y las disfunciones de la burocracia, así como huir de los férreos controles del derecho administrativo. Para ello, se aplican a la Administración Pública esquemas más propios de la cultura de la empresa privada. La corriente anglosajona denominada como nueva gestión pública, nacida en los años setenta (Ronald Reagan, Margaret Thatcher), sirve para definir el espíritu de cambio político-económico del perfil de los profesionales, que Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, introdujo con su salto a la política española.

En España, el contexto posterior a la crisis económica obligó a una reflexión profunda sobre cómo se interrelacionaba lo público y lo privado, puesto que una parte de los ciudadanos culpaba a los políticos por su mala gestión. Las imágenes de miles de kilómetros de AVE que pasaban por ciudades poco pobladas; los aeropuertos en medio de la nada; las tramas de corrupción inundando los telediarios... La sensación de picaresca se fue extendiendo como la pólvora. Así, el nicho que Ciudadanos encontró para solventar la crisis de representación se basaba en corregir esas ineficiencias, a veces vinculadas a tramas de corrupción, que generaban en la ciudadanía malestar y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Conceptos como «capitalismo de amiguetes» y «capitalismo clientelista» —o en la más pura jerga del partido, los «chiringuitos políticos»— eran el vívido ejemplo de cuál era el diagnóstico de la situación que hacía el partido naranja, que desde que aterrizó en el tablero po-

lítico había planteado suprimir entes u órganos de la Administración —y, por extensión, todo un entramado que englobaron bajo ese concepto de «chiringuitos», como institutos públicos y otros organismos— que, a su juicio, solo servían para colocar a cargos del partido de turno y actuar como nichos de corrupción.

El máximo exponente de la esencia regeneracionista de Ciudadanos era Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, economista de cabecera del partido naranja en sus inicios. Este abogaba por la modernización de España, en sintonía con el espíritu de principios del siglo xx. De ese modo, el modelo político-económico de Ciudadanos debía entenderse como una reacción a los vicios del sistema en general, y de la enarquilla en particular: incapacidad de reforma e innovación, ineficiencias, inexistente cultura de evaluación de las políticas públicas. Aunque su crítica se realizaba con independencia de que hubiera Gobiernos del PP o del PSOE, esta era más severa por el lado de los populares, por cuanto ambos son partidos dentro del espectro de ideología liberal-conservadora.

Es interesante citar al respecto el trabajo de Lapuente y Dahlström, *Organizando el Leviatán* (2018). Según los autores, en los sistemas burocráticos donde las carreras de políticos y burócratas con frecuencia se entrelazan —con ejemplos de funcionarios metidos a políticos o políticos que ascienden a funcionarios—, como en el caso español, se pueden generar tres potenciales efectos negativos. Primero, no ayudan a solventar el problema de la corrupción política; segundo, fomentan que la Administración huya del reformismo o la innovación y, por último, en ellos disminuye la eficacia de la función público-política. Esto es así porque si la promoción hacia una mayoría de

puestos directivos de la Administración Pública se realiza según criterios de afinidad política —*dedocracia*—, lo más probable es que el funcionario no tenga la misma propensión a denunciar según qué prácticas porque se juega su puesto y la confianza del jefe. Se parte de la idea de que la corrupción puede producirse en ciertos casos, en forma de mecanismos sutiles e informales con apariencia incluso legal. En sistemas como el anglosajón, en cambio, los funcionarios actúan como un cuerpo separado y autónomo, por lo que estos no obtienen incentivos al ceder ante sus superiores o mirar hacia otro lado (Lapuente y Dahlström, 2018).

Por ejemplo, no contribuye a despolitizar la cúpula de la Administración la recurrente práctica de desprofesionalizar cargos que anteriormente eran ocupados por funcionarios sustituyéndolos por personas afines o miembros del partido. Como se dice en el libro *La urna rota*, «hay tantos cargos de confianza que las administraciones españolas son prácticamente una extensión de los partidos» (Galindo *et al.*). Por ello, la formación naranja reabrió el debate sobre la necesidad de atajar la endogamia política. Su solución era que los políticos fueran personalidades que se hubiesen labrado una carrera profesional en la empresa privada. Por un lado, porque les suponía mayor proximidad al entorno profesional —autónomos, pymes, trabajadores...— y más capacidad para captar sus demandas, asumiendo que lo público está desconectado de lo privado y que ello desconecta a amplias capas de la población, alejadas del entramado público-político. A través del prisma de la eficiencia, Cs proponía una crítica al criterio tecnocrático, como si el político que proviene de la empresa privada fuese más eficiente y tuviera mayor capacidad de atajar la lentitud y el exceso de procedimientos de la Administración.